



Revista Andina de Estudios Políticos

ISSN: 2221-4135

<http://revistas.ojs.es/index.php/revistaestudiosandinos/index>

CARBALLEDA, Alfredo; DILORETTO, María G.; LOZANO, Juan I. & SALA, Juan B. (2014). Reflexiones en torno a la accesibilidad a los servicios sociales, en los territorios de relegación. Tensiones entre el diseño y la implementación de las políticas sociales. *Revista Andina de Estudios Políticos*, Vol. IV, N° 1, pp. 30-47.

Artículo Publicado por: **Instituto de Estudios Políticos Andinos – IEPA**

www.iepa.org.pe

Todos los Derechos Reservados

El presente producto está licenciado por Creative Commons. El Instituto de Estudios Políticos Andinos se reserva el derecho de publicación de los artículos. Cada uno de los artículos es publicado con los permisos correspondientes de los autores. La Revista Andina de Estudios Políticos es una revista publicado bajo la plataforma OJS que garantiza la distribución del presente artículo de manera libre y gratuita.

**REFLEXIONES EN TORNO A LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS
SOCIALES EN LOS TERRITORIOS DE RELEGACIÓN. TENSIONES
ENTRE EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES**

*REFLECTIONS ON THE ACCESSIBILITY TO SOCIAL SERVICES IN
RELEGATED TERRITORIES. TENSIONS IN THE DESIGN AND THE
IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICIES*

CARBALLEDA, Alfredo
Universidad Nacional de La Plata

DILORETTO, María Graciela.
Universidad Nacional de La Plata

LOZANO, Juan Ignacio
Universidad Nacional de La Plata

SALA, Juan Bautista
Universidad Nacional de La Plata

Resumen

Para Argentina, desde el año 2003, comienza a producirse una reforma de la política social basada en modelos focalizados y compensatorios; esta reforma generó condiciones de vulnerabilidad social que complejizaron las relaciones a escala micro social.

Considerando las implicancias que el proceso de crecimiento de la desigualdad ha dejado, se observa una profundización de una sociedad dual y desigual, expresada en territorios periféricos de las grandes ciudades de nuestro país (Buenos Aires, por ejemplo). En este artículo reflexionaremos en la importancia de la proximidad del Estado en la ejecución de políticas sociales para reconocer las discontinuidades que la fragmentación les impone.

Palabras clave: Política social. Accesibilidad. Territorios relegados.

Abstract

In Argentina, since 2003, started a reform of the focalized and compensatory models for delivering policies in relegated territories. That reform has deepened the social vulnerability and has impacted on the social relations in those territories.

Considering that the growing of inequality left a dual and unequal society expressed in relegated territories from the big cities of Argentina (Buenos Aires, for instance), this article reflects on the importance of the proximity of the State in the implementation of social policies in relegated territories and aims to reckon the discontinuities that fragmentation imposes to them.

Keywords: Social policy. Accessibility. Relegated Territories.

Carballeda Alfredo: Licenciado en Trabajo Social (Universidad de Buenos Aires). Doctor en Ciencias Sociales (Pontificia Universidade Católica de São Paulo) Profesor Titular Ordinario, Cátedra Trabajo Social I (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata). Contacto: alfredocarballeda@yahoo.com.ar.

Diloretto, María Graciela. Licenciada en Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata), Especialista en Política, Evaluación y Gerencia Social (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Buenos Aires). Profesor Titular, Cátedra Estructura Social y Problemas Sociales Argentinos (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata). Contacto: mdiloretto@gmail.com.

Lozano, Juan Ignacio Licenciado en Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata), Magister en Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata), candidato a Doctor en Ciencias Sociales (Instituto de Desarrollo Económico y Social – Universidad Nacional General Sarmiento), Profesor adjunto, Cátedra Estructura Social y Problemas Sociales Argentinos (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata). Contacto: juanignaciolozano@yahoo.com.ar.

Sala, Juan Bautista. Licenciado en Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata), candidato a Especialista en políticas sociales (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata). Jefe de Trabajos Prácticos, Cátedra Estructura Social y Problemas Sociales Argentinos (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata) Contacto: bautistasala@yahoo.com.ar.

REFLEXIONES EN TORNO A LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS TERRITORIOS DE RELEGACIÓN. TENSIONES ENTRE EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

Introducción

Para Argentina, a partir del año 2003, comienza a producirse una reforma de la política social de los modelos focalizados y compensatorios ocurrida en la década de los noventa, esta situación trajo consigo una serie de cambios en los diseños e implementación de políticas en barrios en situación de relegación que nos preocupa abordar y analizar en este artículo.

Coincidimos con Wacquant (2001) y Segura (2006) en que la relegación remite a experiencias de sus ocupantes de barrios, en los que existe una conjunción de procesos que profundizan “aislamiento”. Por ello, el equipo de investigación en el que participamos, estableció como criterio de identificación a aquellos territorios que duplicaron el crecimiento demográfico del municipio al que pertenecen, generando condiciones de vulnerabilidad social, que complejizan las relaciones a escala micro social.

Identificamos que, a partir del 2003, una marcada recuperación de determinadas variables tales como: trabajo, salario, reducción de la pobreza -entre otros logros-, se exponen también a desafíos abiertos y a tensiones antes problemas considerados estructurales, cuyo origen es necesario profundizar y complejizar. Considerando las implicancias que presenta el proceso de crecimiento de la desigualdad, se observa un camino hacia la profundización de una sociedad cada vez más polarizada -que a su vez retroalimenta la desigualdad- que se expresa particularmente en los territorios periféricos de las grandes ciudades de nuestro país. Este proceso trae como consecuencia una acelerada segregación de la población más pobre, con una consiguiente acumulación de desventajas en sus procesos de integración relacional y de inserción laboral.

Desde el equipo de investigación en el que participamos¹, se ha observado que en la implementación de políticas sociales en territorios relegados, los organismos ejecutores de las políticas de desarrollo del hábitat, no cuentan con un nivel institucional de proximidad con capacidad de reconocer estos territorios y sus complejidades.

Estructuramos el siguiente artículo en tres momentos: un *primero* en el que analizamos lo sucedido con las transformaciones en el rol del Estado y de las políticas sociales, del mercado de trabajo y de ciertos indicadores de situación social en el contexto posterior a la crisis de 2001, en un escenario - en el que aún sin un consenso en la academia- solemos afirmar como de “posneoliberal” o “después

¹ Los proyectos desarrollados al momento son “La Accesibilidad a los servicios sociales en los territorios de relegación de la Región Capital. Un estudio de casos a escala barrial” (2010-2013) y “La accesibilidad a las políticas sociales en barrios de relegación: lo territorial y las organizaciones sociales. Construcción de un modelo de análisis e intervención. (2014 -2017). Ambos proyectos son dirigidos por el Dr. Alfredo Carballeda y co dirigidos por la Lic. Maria Diloretto, en la facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

del neoliberalismo”². Asimismo resaltamos ciertos desafíos existentes, en torno a los resultados alcanzados y a procesos que todavía no muestran los resultados esperados.

Posteriormente, desarrollaremos dos categorías centrales a la hora de analizar el rol de las políticas sociales y sus posibles efectos en la sociedad: nos referimos a –por un lado- a la accesibilidad a los territorios de relegación social, y *los desafíos que* tiene un Estado en territorios sin proximidad construida.

Finalmente reflexionamos, a partir de una serie de resultados de una investigación precedente, sobre la proximidad en el nivel de ejecución que resulta imprescindible para reconocer las discontinuidades que la fragmentación social impone al espacio construido. Si es necesario pensar nuevas políticas sociales para estas poblaciones específicas, o tal vez, desde una perspectiva más estructural, definir y construir nuevas institucionalidades, que viabilicen políticas en territorios de relegación, que actualmente presentan resultados difusos.

Algunas precisiones en torno a la Argentina “posneoliberal”

A continuación desarrollaremos en este apartado una serie de reflexiones sobre las consecuencias económicas y sociales de la implementación de medidas neoliberales en Argentina, desde la década de los setenta hasta finales de 2001. El surgimiento de una etapa post neoliberal surge en un marco generalizado de crisis social y política. A más de diez años de esa salida, realizamos un balance de los principales logros como así también desafíos, frente a tres décadas de orientación neoliberal que permearon en la estructura social argentina.

Uno de los principales efectos del neoliberalismo en nuestro país fue un marcado empobrecimiento a partir de la reducción del poder adquisitivo de los salarios que sufrieron los trabajadores y el profundo proceso de transformación del mercado de trabajo.

La marcada caída del poder adquisitivo sucede en una transformación de la estructura económica a través de la reconversión productiva, la desindustrialización, la privatización de bienes y servicios. A ello se ha sumado un prolongado estancamiento económico y un cambio del modo de inserción de Argentina en el mercado económico mundial, a través de una mayor apertura económica³.

Si bien el actual escenario social difiere del de los noventa y puede situarse fuera de un marco de crisis, aún continúa signado por el aumento de la vulnerabilidad social y de la incertidumbre, que

² Vilas (2011) afirma que “referirse a estos procesos como post-neoliberales o que se desarrollan después del neoliberalismo no alude a una cuestión simplemente cronológica sino a la configuración efectiva de los escenarios políticos y a la identidad de sus principales actores” (Vilas, 2011, p. 14)

³ Siguiendo la línea de análisis de Beccaria (1993), reestructuración y reconversión son tomadas, para los fines de este trabajo, como términos sinónimos que sirven para identificar los distintos aspectos de la estructura productiva, que surgen como respuesta a las transformaciones en las reglas de juego que enmarcan el proceso global de acumulación del capital a fines de siglo.

parece consolidar formas de pobreza que exceden la falta de recursos económicos o la imposibilidad de alcanzar determinados estándares de vida.

Primeras aproximaciones

Para comprender mejor este proceso, es necesario remarcar la importancia que adquiere la pérdida de significancia de ciertas categorías ocupacionales, relacionadas con el trabajo y el empleo⁴, en el tratamiento de las modificaciones en la estructura social. Hasta la emergencia de la crisis generada a partir de los años setenta, la distinción entre las categorías ocupacionales relacionadas a la fuerza de trabajo poseía límites precisos y la cualidad de presentar estabilidad y permanencia en el tiempo (Neffa, 1996). Pero ante los procesos de reconversión sufridos por el mercado laboral, comienza a denotarse un mayor dinamismo interno entre dichas categorías, que presentan entonces fronteras más difusas.

Un número cada vez mayor de personas se encuentran en una situación ambigua con respecto al empleo: en una intersección, o en el proceso de pasar de una categoría ocupacional a otra, sin adoptar la categoría de desempleado.

Hasta la década de los ochenta, la relación entre crecimiento económico y absorción productiva de la fuerza de trabajo, junto con un Estado de bienestar incipiente -aunque limitado e imperfecto-, fueron los mecanismos que alimentaron las expectativas de movilidad social de importantes sectores de la población latinoamericana. Se esperaba que los procesos de urbanización e industrialización, el desarrollo del sistema de educación pública y la expansión de las ocupaciones no manuales condujeran a la conformación de sociedades más equitativas. Estas expectativas estuvieron más cerca de materializarse en algunos países, mientras que en otros constituyeron promesas incumplidas para amplios sectores de la población.

Ya en los noventa, el mercado de trabajo fue perdiendo su potencial integrador y de movilidad social. El incremento de los niveles de desempleo, junto a la extensión de la inseguridad laboral y la desprotección social, no sólo evidencia un progresivo debilitamiento de la relación entre crecimiento económico y empleo, sino que cuestionan seriamente las potencialidades del nuevo modelo económico, tanto para absorber fuerza de trabajo como para reducir la pobreza y las desigualdades persistentes y crecientes.

A la par de la erosión de los anteriores mecanismos integradores, el aumento de la desigualdad en la distribución de oportunidades para acceder a los procesos en marcha, constituye uno de los indicadores que denotan una estructura social cada vez más rígida. *“De esta forma, las condiciones con que*

⁴ Vale hacer la distinción entre trabajo y empleo. El trabajo puede adoptar diversos estatutos, desde el punto de vista de que exista o no relación salarial: libre, asalariado o forzado. El empleo es la actividad donde predomina el trabajo remunerado bajo su modalidad salarial, o como producto de ventas de servicios o producción; incluye todo tipo de trabajo, siempre que sea remunerado (Neffa, 1996).

“cuentan los hogares pasan a desempeñar un papel decisivo en el destino de los individuos, en un contexto marcadamente adverso para los ‘perdedores’ del nuevo juego social” (Bayón, 2006).

La precarización del mercado laboral pasa a comprometer, entonces, otras áreas de la vida diaria:

“Lo determinante del proceso -de exclusión- es el hecho de que el trabajo deja de ser el ‘gran integrador’. Se trata de un proceso de descongelamiento, de desestabilización de los estables, de vulnerabilización de posiciones antes seguras. La cuestión social no se reduce a la cuestión de la exclusión. Exclusión o disgregación son el efecto de una conmoción general cuyas causas se hallan en el trabajo y su modo de organización actual” (Ewald, 1995, p. 34).

Esta situación se tradujo en un aumento de la vulnerabilidad que sufren determinados grupos sociales. En este contexto, tal como plantea Denis Merklen (2003, 2005) el concepto de pobreza resulta insuficiente para intentar explicar los profundos cambios que han generado en la estructura social las transformaciones en el mercado de trabajo antes referidas. En este sentido, las ideas de vulnerabilidad e inestabilidad podrían ayudar a explicar mejor el actual panorama social.

“Con vulnerabilidad quiere decirse que el individuo carece del tipo de reaseguros que brinda el empleo estable o la propiedad. La vulnerabilidad se expresa en la inestabilidad permanente y en la necesidad de adaptarse a vivir el día a día (...) La idea de vulnerabilidad refiere a los problemas de integración social y expresa una fragilidad de los lazos sociales -de solidaridad, diría Émile Durkheim- que deben favorecer el desarrollo de los individuos” (Ewald, 1995 en Merklen, 2003, pp. 112–113).

La asociación entre desigualdad en la distribución del ingreso e inclusión social ha estado medida históricamente por el funcionamiento de las instituciones sociales, económicas y políticas, que han favorecido o coartado las oportunidades de satisfacción de necesidades y -sobre todo- de la práctica de ciudadanía. En el caso argentino, la seguridad social estuvo profundamente ligada a la condición de trabajador, lo que ha derivado en lo que Bayón (2006) denomina una inclusión diferenciada en el sistema social. Esta forma de inclusión plantea una segmentación en la inserción de la población en el sistema social, que no ha revestido un carácter universal. Con el advenimiento del neoliberalismo, esta segmentación emerge con mayor crudeza ante el progresivo desmantelamiento y mercantilización de los servicios sociales. La descentralización de servicios fundamentales, como la educación y la salud, han derivado no sólo en una mayor inequidad, sino en una dramática profundización de las distancias sociales en función tanto del acceso a oportunidades (ya sea de empleo, de educación o de salud) como -y esto es lo novedoso- de la calidad de las oportunidades a las que se accede.

Es precisamente el carácter acumulativo de estas situaciones de desventaja relacionadas con la precariedad ocupacional y con otras dimensiones de la vida económica y social⁵ lo que hace que

⁵ Al respecto ver: Serge Paugam (1991, 2007) sobre pobreza y empleo en Francia.

ciertos grupos sean más vulnerables a la pobreza, y encuentren mayores obstáculos a su inclusión social.

En suma, la economía y las modificaciones en el rol del Estado operadas en los noventa, contribuyeron de forma determinante a conformar la actual estructura ocupacional y social de la Argentina. Las transformaciones estructurales de la economía dieron preeminencia a las actividades financieras y de servicios en general, en detrimento de los sectores productivos, afectando especialmente a la industria.

Como es bien sabido, la consecuencia social fue la exclusión de amplios sectores de la población, la fragmentación del tejido social, el deterioro de las identidades colectivas, el descreimiento en la política como herramienta fundamental de la transformación social, el incremento de la violencia material y simbólica, que genera una sociedad de consumo basada en la generación de necesidades imposibles de ser satisfechas a través del “fruto del trabajo”: el salario. La herencia social fue el aumento de la desigualdad en términos de ingreso, la profundización de la pobreza e indigencia, crecimiento de los niveles de desocupación y exclusión social.

Al respecto, al analizar la precarización laboral que afecta particularmente a la población trabajadora, debe agregarse otro elemento a considerar, la memoria de tiempos mejores:

“...la pérdida de la pertenencia a empresas que en otros tiempos pudieron encarnar el ‘ideal’ del trabajador -estatales, con muy buenas remuneraciones, grandes beneficios sociales, alto grado de actividad sindical- alrededor de las cuales prácticamente giraba su vida, adquiere una significancia fuera de lo común: se ha percibido -en el análisis de las trayectorias ocupacionales- una visión nostálgica y dolorosa hacia el pasado, que toma ribetes de paraíso perdido. Quizá la protección social y laboral- brindada por estas empresas (...) hace aún más marcado el contraste con las nuevas condiciones de flexibilización laboral a las que debe enfrentarse el trabajador en la Argentina de los '90” (Diloretto, 2009).

¿Hacia una rigidización de la Estructura social?

El nexo entre inestabilidad laboral, pobreza y desprotección social se expresa de manera particular en el caso argentino: en términos generales, en el actual escenario local no es necesario estar desempleado para situarse por debajo de los umbrales de la pobreza (Portes & Hoffman, 2003). En este sentido, la estructura social argentina ha evidenciado marcados cambios en su composición que están relacionados con el proceso de reconversión productiva que desde la década de los setenta viene atravesando nuestro país.

Las relaciones entre la pobreza y la precariedad laboral, en sus diferentes expresiones, muestra la progresiva erosión de los anteriores mecanismos de supervivencia económica y obtención de ingresos. La posibilidad de “ganarse la vida” trabajando, al menos de manera continuada, es cada vez

más incierta. El debilitamiento del trabajo y la educación como canales de movilidad social -o al menos como fuentes que alimentaban expectativas de mejoramiento futuro-, junto con la creciente inequidad en la distribución de oportunidades ocupacionales y educativas, dan cuenta de una estructura social que se hace cada vez más rígida. En otras palabras, el margen de maniobra para superar situaciones de desventaja social entre quienes provienen de hogares desfavorecidos -en cuanto a ingreso, empleo, educación, vivienda y otros aspectos- se estrechan progresivamente en un contexto cada vez más hostil para quienes no están dotados de partida de ciertas habilidades y destrezas sociales. La carencia de estos recursos conduce al entrapamiento en oportunidades de vida signadas por una “espiral de precariedad” en la cual las desventajas se retroalimentan y acumulan (Paugam, 2007).

Este cambio en la estructura social presenta también una lectura política. Los golpes de Estado que azotaron a América Latina en la década del setenta pueden interpretarse como una forma de llevar al gobierno a minorías dispuestas a tomar capitales del exterior en forma de préstamos (en un momento en que había en el mercado financiero mundial una sobreoferta de capitales) y de reducir, por medio del terror del Estado, el desafío de un sindicalismo poderoso, que mostraba un fuerte grado de representatividad política, lograba mantener alto el valor del salario y podía vetar los proyectos de máxima de un capitalismo al que la crisis hacía cada vez más depredador. En el caso específico argentino, se ha señalado la necesidad política que se planteó el mercado financiero nacional y multinacional: destruir o por lo menos debilitar seriamente a una clase obrera a la que se veía como el elemento central de reivindicaciones populares que había llegado a un nivel máximo en 1975⁶.

En suma, estas transformaciones en el mercado de trabajo y en el rol del Estado (en su articulación con la producción de bienes y servicios), y el drástico aumento de la Deuda Externa, fueron factores que repercutieron en la conformación de una nueva estructura social, ya que se tradujeron en un aumento de la desigualdad distributiva, una caída generalizada de los ingresos (Beccaria, 1993a) y un deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población (particularmente sectores medios y bajos), que evidencian un escenario diferente al que históricamente había caracterizado a la Argentina.

El fantasma del estancamiento, la rigidización de la estructura social, ha creado un contexto de incertidumbre para estos sectores de la sociedad, que aparecen con escasos recursos para compensar la desprotección a que los expone el mercado de trabajo y los cambios en la política social. La alta desigualdad en la distribución de oportunidades educativas y ocupacionales y de la protección social revelan que los niveles de ingreso son factores clave del acceso a los servicios sociales y de la calidad de los servicios a los que se accede, lo cual agrega a la falta de expectativas de ascenso social, una polarización y segmentación crecientes.

⁶ Esto ha sido enfatizado en Basualdo (1987) y en Acuña (1995).

En términos de Bayón (2006):

“El hogar de origen constituye un antecedente cada vez más fuerte del lugar que se ocupará en la estructura social. Las ventajas o desventajas iniciales no sólo se mantienen y profundizan en el curso de la vida, sino que tienden a reproducirse entre generaciones. La dificultad creciente que enfrentan los sectores más desfavorecidos para escapar de los circuitos de privación, manifiesta con más claridad las tendencias excluyentes del modelo neoliberal. Se trata no sólo de sociedades más desiguales y segmentadas, sino de estructuras sociales más rígidas en las cuales aparecen debilitados los anteriores canales y expectativas de movilidad social” (2006, pp. 149–150).

Los debates y desafíos en la era post neoliberal

Uno de los principales desafíos presente en las Ciencias Sociales y en particular para el Trabajo Social, es el desarrollo de una producción discursiva en torno los procesos políticos, económicos y sociales en la Argentina post neoliberal que favorezca la reflexión crítica tanto en lo referente a la intervención profesional como al debate de la elaboración de políticas públicas.

A continuación, analizaremos lo sucedido en Argentina, quien junto a un contexto político particular latinoamericano comenzaron desde inicios del nuevo siglo, una etapa económica y política a contramano de las recomendaciones y medidas del FMI, del Banco Mundial y del capitalismo financiero a nivel mundial, donde uno de los objetivos principales es el de recuperar y profundizar el Estado de Bienestar.

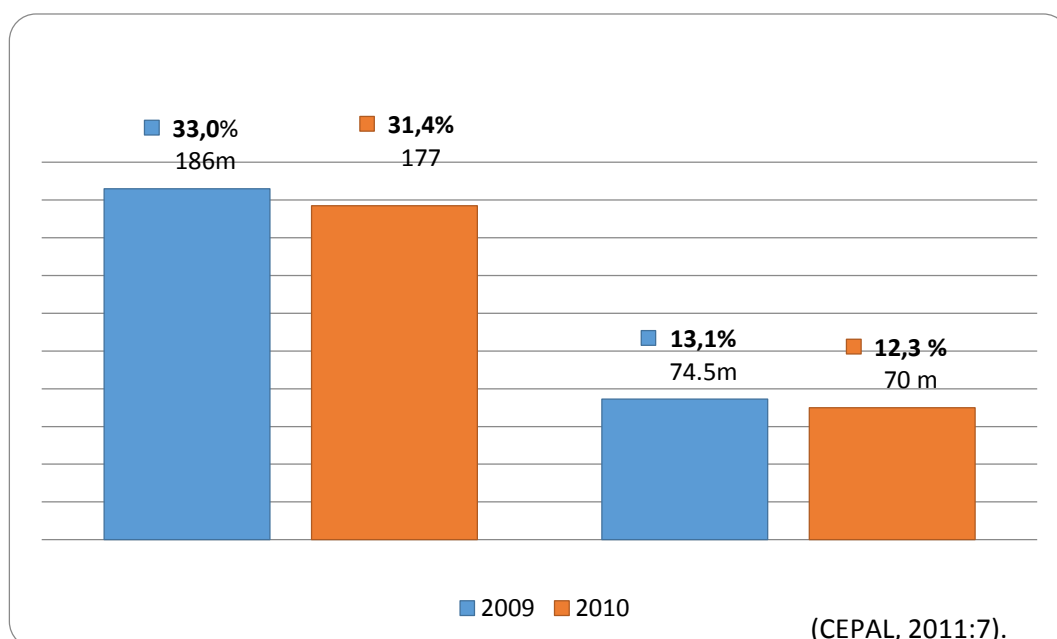
Este análisis nos permite explicar mejor la década que ha pasado y precisar conceptualmente las rupturas, continuidades y desafíos de la presente. Al respecto (Calcagno & Alfredo Eric, 2011, pp. 46–48) señala:

“[Argentina] creció durante seis años a una tasa promedio de 8,6%, la tasa de inversión subió del 11 al 23 % entre 2002 y 2008; de 2001 a 2008 las exportaciones aumentaron de 26.500 a 70.000 millones de dólares. Con este telón de fondo de auge macroeconómico, comenzó a recuperarse el Estado de Bienestar ... se generaron 5 millones de nuevos empleos; se incorporó a 2,4 millones de nuevos jubilados, se recuperó para el Estado el sistema de Jubilaciones y se estableció un sistema automático de suba de montos; en el 2002 la participación de los salarios en el PIB era del 34% y en el 2009 del 43%, la desocupación cayó del 19,7% en 2002 a 7,4% en 2010, se implementó la asignación universal por hijo; se cumplieron importantes planes de vivienda y de salud; se ejecutan múltiples programas de desarrollo social ...”

Más allá de la heterogeneidad latinoamericana se observa una marcada variación en torno a la pobreza y a la indigencia, el debate sobre la disminución de la desigualdad es más complejo. Un informe de la CEPAL, en 2011 establece que:

“... la principal tendencia del período reciente muestra que en el año 2010 disminuyeron la pobreza y la indigencia en la región, en consonancia con la recuperación del crecimiento económico. Ambos indicadores se sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Si bien la caída de la pobreza se debe principalmente al crecimiento del ingreso medio de los hogares, la reducción de la desigualdad también ha incidido de manera significativa. En 2010, el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes. Las cifras indican que, tras la crisis de 2009, la recuperación económica se ha reflejado (al menos en parte) en los indicadores de pobreza. Efectivamente, con respecto al año 2009 la tasa de pobreza se redujo 1,6 puntos porcentuales, y la de indigencia 0,8 puntos porcentuales. A partir de las proyecciones de crecimiento del PIB y de las previsiones de la evolución de la inflación en cada país, cabe esperar que en el año 2011 la tasa de pobreza se reduzca levemente. En cambio, la tasa de indigencia podría aumentar, ya que el alza del precio de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares. En materia de distribución del ingreso, en años recientes se han observado cambios favorables hacia una menor concentración, debido sobre todo a un mejor reparto de los ingresos laborales y al papel redistributivo del Estado a través de las transferencias monetarias. Si bien la reducción de la desigualdad es leve, contribuye a configurar un escenario favorable, sobre todo en un contexto de ausencia prolongada de mejoras distributivas generalizadas.” (CEPAL, 2012, pp. 7-8).

Gráfico 1. Pobreza e indigencia en América Latina



Fuente: CEPAL (2012).

Ante el imperativo de precisar avances, retrocesos, límites y posibilidades que presenta este proceso, nos parece interesante traer a colación las observaciones que realiza Gabriel Kessler (2011), sobre una serie de tendencias con respecto a desigualdad social en la Argentina. Para el autor, uno de los principales datos que surgen del aumento de la desigualdad se asocia al incremento de delitos violentos y de la segregación socio-espacial (agudizado por el aumento de las urbanizaciones privadas, propias de la década del '90). Esta tendencia ratifica que la segregación retroalimenta la desigualdad, ya que el espacio de encuentro entre los que más y menos tienen, se reduce cada vez más, tanto por el lugar de residencia como por la segmentación en los accesos a los servicios.

Situaciones vinculadas a la discriminación han sido un tema destacable en el último periodo, tanto por reacciones xenofóbicas, entre las más graves, como por el avance del Estado en reconocimiento de la diversidad. La creación de un instituto de lucha contra la discriminación y la ley de matrimonio igualitario son ejemplos de esta afirmación.

En términos de políticas sociales, en Argentina se evidencia un avance de políticas más universales, como la ampliación de jubilaciones y la asignación universal. Paralelamente, aparecen nuevas ideas de peligrosidad, vinculadas mayoritariamente a la población inmigrante extranjera (curiosamente en el período con menor proporción de población no nativa de la historia) y a los sectores más pobres.

Kessler (2011) también identifica otras tendencias que aunque parecieran contradictorias, no hacen más que marcar la complejidad de este proceso, ya que frente al escenario de movilidad descendente masiva de 2001, se establece que una parte importante de la clase media se mantuvo estable, “empató”, mientras que otros sectores otrora empobrecidos tuvieron una mejora de su situación; incluso algunos, con fuerte calificación laboral y capital social se recuperaron totalmente.

Otra tendencia a considerar –que marca discontinuidades con respecto al escenario social de los '90– es la expansión educativa que se fortaleció por dos procesos. Por un lado, la creación de nuevas universidades ubicadas en el Conurbano Bonaerense, que limita con la capital federal, y en provincias más alejadas de los grandes centros urbanos, ofrece un conjunto de carreras universitarias para estudiantes que por primera vez acceden a cursar estudios universitarios. Y por otro, el diseño y la implementación de nuevas modalidades de inserción educativa para la complementación de los estudios medios (que pasan a ser obligatorios), tales como el FINES., la ampliación en la duración de la enseñanza básica, ampliada a 9 años en algunos distritos también contribuyen a la mencionada expansión educativa.

Como contrapartida Pérez (2011) corrobora que si bien la educación es central para determinar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo, los jóvenes de los sectores populares ingresan tempranamente en el mercado de trabajo en puestos de baja calidad, lo que los obliga a abandonar el sistema educativo. El trabajo, su calidad y el conjunto de beneficios relacionados a él, aparece como

una de las principales claves para avanzar en términos de inclusión y reducción de la desigualdad social.

En efecto, si la inestabilidad y precariedad de las trayectorias laborales y educativas y sus consecuencias impactan en las posibilidades de movilidad social de los sujetos, se infiere que frente a la estructura de oportunidades abiertas a través de la recuperación económica y el avance de ciertos indicadores, la apropiación sigue siendo desigual. Aparentemente, el lugar que se ocupa en la estructura social sigue siendo condicionante de las posibilidades de los individuos de inclusión social.

De esta forma, intentar precisar y analizar la diversidad y heterogeneidad de las tendencias, procesos, actores y construcción de agenda en este contexto de recuperación, supone avanzar en el abordaje de las formas y los tipos de construcción de respuestas que genera el Estado y la sociedad en su conjunto, frente a la desigualdad persistente.

Tal vez a modo de síntesis, cabe plantear la necesidad de profundizar el análisis de los mecanismos de ruptura con las posiciones neoconservadoras y neoliberales que aún resisten y enfrentan los procesos de cambio en América Latina.

Los problemas de la accesibilidad en los territorios de relegación.

Como analizamos en el apartado anterior, el proceso político y económico que está presente en América Latina y en nuestro país en particular, ha logrado el restablecimiento de ciertos resortes asociados a servicios sociales -en tanto componentes de las políticas sociales- son constitutivos del régimen social de acumulación. Encuentran su especificidad en el hecho de orientarse de manera directa a las condiciones de vida y de distintos sectores y grupos sociales, operando en el momento de la distribución secundaria del ingreso. Los servicios sociales, a partir de su inscripción como políticas, colaboran con el orden social, produciendo discursos referidos a la sociedad y al principio articulador de ésta como un todo (Danani, 1996).

La accesibilidad a los servicios sociales es concebida como parte de la efectivización de los derechos sociales. Para Esping-Andersen (2000), los derechos sociales tienen la capacidad de desmercantilización y el acceso a los mismos eleva el nivel de vida de las poblaciones, las hace más independientes y autónomas de las fuerzas del mercado. La prestación de los servicios sociales supone constituir determinados arreglos cualitativos entre el Estado, el mercado y la familia.

La prestación de los servicios sociales y sus modos organizativos pueden asumir formas complejas y pertenecer a un campo específico con relación a la economía de servicios y los regímenes de Estados de bienestar. Los servicios sociales, se enmarcan en el trabajo de “servicios”, operan principalmente como producción inmaterial a través de símbolos, información, competencias discursivas e interacción con personas. El servicio social está marcado por el desarrollo de la “relación de

servicio”, en la medida en que la actividad está concebida -y con mucha frecuencia, realizada- con la colaboración del demandante (Britos, 2006).

Atento a las diferentes dimensiones de accesibilidad (geográfica; económica, administrativa y cultural o simbólica), entendemos ésta como un concepto relacional que se presenta como el encuentro entre los sujetos y los servicios. En esta dimensión subjetiva intervienen vivencias, saberes construidos, sentimientos y percepciones, entendiendo que la subjetividad se construye a lo largo de la vida de los sujetos y que la misma es producto de experiencias vinculares. En tanto definimos a la accesibilidad como un vínculo que se construye entre usuarios y servicios sociales, se considera que su análisis debe incluir el estudio de las representaciones, prácticas y discursos de la población conjuntamente con las condiciones, discursos y prácticas de los servicios.

El aumento de la accesibilidad a bienes colectivos no sólo contribuye a una distribución más equitativa de los mismos a nivel micro, sino que también va conformando terrenos de interacción, encuentro y negociación entre vecinos. Esto lleva a interrogarse sobre un tema relevante: las reglas de accesos formales e informales en las distintas instituciones locales. Por reglas y exigencias formales nos referimos a los horarios de atención, o el tipo de requisitos (ser socio, pagar cuotas o prestaciones, y otros) que permiten prever qué tipo de población no tendrá acceso. Así, por ejemplo, los horarios de atención de los consultorios en los hospitales y salas de atención primaria dejan fuera a una parte de la población adulta ocupada. Por otra parte, existen las reglas informales, más complejas de percibir y remover, que también contribuyen a delimitar poblaciones que no accederán a servicios. Son barreras y mecanismos institucionales vinculados con la posesión de capital social mínimo para acceder a un servicio, con el umbral de capital cultural básico para interactuar en ellos de manera eficaz y con otros obstáculos de orden sociocultural.

Otro aspecto a tener en cuenta son las construcciones histórico-culturales que establecen vinculaciones entre el acceso a derechos sociales y la subjetividad, que trascienden en el tiempo. La existencia en la propia historia de las personas de acceso a derechos o la privación histórica de ellos, incide en las expectativas y en las capacidades de modificar las condiciones que limitan la vida.

Algunos autores que han planteado la relación entre políticas sociales y territorio, describen como uno de los principales cambios en los últimos años, el hecho de que las políticas sociales han pasado del mejoramiento de las condiciones de reproducción (salud, educación, previsión, formas de consumo, etc.) a la posibilidad misma de la reproducción (planes alimentarios, planes de empleo, desarrollo comunitario). Estos últimos se presentan siempre como una respuesta originariamente transitoria, que, sin embargo, perdura en el tiempo (Arias & Sadier, 2003).

Siguiendo a Claude Raffestin (1980), la dimensión territorial implica, la diferenciación entre espacio y territorio como términos que no son equivalentes. El espacio es entonces, preexistente a toda acción. Es un lugar de posibilidades, es la realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda

práctica que será el objeto de que un actor manifieste una ambición intencional a su entorno. El territorio, evidentemente, toma apoyo sobre el espacio, pero no es el espacio: es una producción a partir del espacio; es el resultado de una acción conducida por un actor que realiza un programa. Al apropiarse de un espacio, el actor lo territorializa. La producción para todas las relaciones que se ponen en juego, se inscriben dentro de un campo de poder. Entonces la construcción de un territorio revela relaciones marcadas por el poder, poder ejercido por personas o grupos sin el cual no se define un territorio (Raffestin, 1980).

Boaventura De Sousa Santos (1998), en sus escritos sobre la crisis del contrato y la exclusión, advierte sobre los riesgos de la emergencia del fascismo social y de un estado paralelo en las zonas de relegación. Entre esos riesgos destaca el fascismo del apartheid social. Se trata de la segregación social de los excluidos a través de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas. Las zonas salvajes son las zonas de estado, de naturaleza hobbesiano. Las zonas civilizadas son las zonas de contrato social y viven sobre la constante amenaza de las zonas salvajes (de Sousa Santos, 1998, p. 225). Una de las manifestaciones más gráficas de la desigualdad en América Latina (que es la región más desigual del mundo), es la proliferación de guetos de pobres, pero también guetos de ricos.

Maristella Svampa (2005) ha analizado parte de la fractura social que sufrió la Argentina en la década de los noventa a partir del auge de los *country*s, barrios privados y otras formas de encierro de sectores de las clases medias y medias altas. En América Latina la población que vive en la informalidad con relación al suelo urbano llega a aproximadamente al 40% según la CEPAL⁷. La situación de ilegalidad/informalidad donde viven gran parte de las poblaciones jóvenes más desprotegidas, se caracteriza por la ausencia de servicios y un deterioro de las condiciones de vida, en este sentido en un estudio de CEPAL del 2006 (Clichevsky, 2006), se han sistematizado diversas experiencias exitosas en la prevención de la informalidad urbana en América Latina.

La unidad esencial de la vida urbana es el barrio, apareciendo como ámbito de producción y reproducción material, como referente de identidades sociales distintivas y como representación simbólica dentro de la vida urbana se constituye en un mediador fundamental entre el universo privado de la casa y el mundo público de la ciudad y proporciona, por lo tanto, algunas referencias básicas para la construcción de indicadores que nos permitan caracterizar ámbitos más amplios de sociabilidad (Gravano, 2003).

⁷ Se entiende por suelo urbano como una porción de tierra rural que ha sido convertida en urbana, según las regulaciones vigentes en cada realidad, que posee infraestructura básica y ambiente natural adecuado, sin riesgos y cuyos ocupantes poseen seguridad en la tenencia para la ocupación y el uso del mismo (escritura pública u otro tipo de instrumento jurídico, según las distintas realidades de la región). El mercado legal de tierra urbana es cada vez más restrictivo para la población de menos ingresos (Clichevsky, 2006).

En estos procesos de constitución de redes de sociabilidad se ponen de manifiesto las distintas atribuciones de derechos y las modalidades diferentes en que las familias se apropian del espacio urbano. Al respecto Oszlak (1991) señala, “el derecho al espacio urbano, el derecho a la ciudad, no es solo el derecho de ocupación del mismo, en el sentido de simple habitación, es también la capacidad de influir sobre aspectos que hacen a la calidad de vida y el acceso a los bienes y servicios presentes en la ciudad. Diferentes localizaciones geográficas implican un acceso diferente y desigual a los bienes y servicios urbanos”. Por esta razón, los barrios y sus habitantes son valorados de manera diferente. De esta forma, la ciudad es un objeto de disputa entre sectores sociales tal vez fragmentados. La trama que va dibujando la lucha por el espacio urbano está ligada a procesos de industrialización–desindustrialización, a la profundización y extensión de la pobreza, a las migraciones, a la formación de identidades que conllevan la construcción de sentidos.

La posibilidad de pensar esta trama desde la escala barrial se presenta para el Trabajo Social en su práctica cotidiana, como un desafío que se caracteriza por la complejidad de la intervención y que implica la construcción de espacios de diálogo, de conexión desde áreas microsociales en la singularidad de la demanda fundada en el padecimiento conectado con lo macrosocial, con la historia, entendiendo al sujeto de la intervención como histórico social (Carballeda, 2006, p. 138).

¿Nuevas Políticas Sociales?: ¿Nuevas Institucionalidades?

La lectura de la trama social urbana, producto de las transformaciones neoliberales de la década de los noventa, nos muestra un nuevo escenario de la pobreza y señala un sentido claro de construcción de una sociedad dual y desigual como consecuencia de la acelerada segregación de pobres que acumulan desventajas, con bajos ingresos monetarios en los territorios de relegación alrededor las grandes ciudades de nuestro país. Se podría afirmar que, como resultado de esta tendencia, la pobreza urbana hoy es más intensa y concentrada que en las décadas de los sesenta y setenta, alcanzando una relevante distancia económica, social y cultural entre las poblaciones de los barrios de relegación y el resto de la sociedad.

A partir de la década de los ochenta los procesos de diferenciación espacial, las transformaciones en el mundo del trabajo, la crisis del estado social y sus políticas de integración, las diferentes composiciones institucionales y demográficas sumadas a la posición estructural y función en la sociedad urbana, convirtieron estos territorios en espacios dislocados de los procesos de modernización y movilidad social de la llamada sociedad urbana.

Wacquant (2001) explica la emergencia de una nueva marginalidad desde el análisis de cuatro lógicas que, a su criterio, reconfiguran los rasgos de la pobreza urbana. Una de ellas se refiere a la dinámica espacial desde los fenómenos de concentración y estigmatización. En este sentido plantea que, sobre los nuevos barrios de “exilio socio económico”, recae un estigma territorial agregando que:

“acompaña a la estigmatización territorial una pronunciada disminución del sentido de comunidad que solía caracterizar a las antiguas localidades obreras. En la actualidad el barrio ya no representa un escudo contra las inseguridades y las presiones del mundo exterior, un paisaje familiar y reafirmante imbuido de significados y formas de mutualidad colectivas. Así, estos barrios de relegación son criaturas de las políticas estatales en materia de vivienda, urbanismo y planificación regional. En el fondo, entonces, su surgimiento, consolidación y dispersión final, son en esencia una cuestión política. Si hay algo que caracteriza a los barrios de relegación que brotaron en el continente cuando los mecanismos de reproducción de la clase obrera empezaron a sufrir tropiezos, es su extrema heterogeneidad étnica, así como su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas y englobar las rutinas diarias de sus habitantes.” (Wacquant, 2001, p. 179).

La historia de la configuración socio-espacial de estos barrios es el producto de la interacción entre fuerzas macroestructurales (nos referimos fundamentalmente a la economía y a las transformaciones en el mundo del trabajo), las políticas estatales y las prácticas de sus habitantes, tanto como individuos como a través de su organización colectiva.

Los recursos obtenidos mediante el trabajo suelen ser insuficientes para la mayoría de las familias de los barrios de relegación. Con salarios mínimos o irregulares y protecciones precarias o inexistentes, los hogares deben recurrir a otros recursos materiales para colmar los déficits provocados por el trabajo precario y así protegerse de la vulnerabilidad. Lo esencial de los recursos que no provienen del trabajo, se encuentran localizados en los laberintos del sistema político, empezando por los servicios urbanos, la salud, la educación, el acceso al agua potable, al saneamiento, a la electricidad. A medida que los habitantes de estos barrios se empobrecen y que las protecciones sociales son deficitarias, la supervivencia depende de la distribución directa de toda suerte de bienes y de productos regularmente repartidos en los barrios.

Desde una perspectiva que pone énfasis en las transformaciones operadas en el mercado de trabajo, en la provisión y acceso a servicios sociales, se entiende que es en estos barrios de relegación donde se concentra la población con mayores niveles de vulnerabilidad social, inseguridad y fragilidad de los hogares para enfrentar cambios en el entorno socioeconómico; explicitando así un creciente debilitamiento de los mecanismos de integración social.

En este sentido, la vulnerabilidad posee dos dimensiones centrales: una económica, en la cual los lazos con el mercado de trabajo se ven amenazados y debilitados; y otra social, caracterizada por la fragilidad de la integración en redes sociales –familiares y comunitarias– y el acceso a los servicios públicos.

La vulnerabilidad constituye, entonces, una amenaza que padecen ciertos sectores de no acceder a puestos de trabajo más calificados –en términos de ingresos, beneficios, condiciones de trabajo, etc.– y de transitar una carrera laboral signada por el desempleo y la inestabilidad. En su dimensión social

la vulnerabilidad se refiere centralmente a la pérdida de capital social y a las crecientes dificultades para acceder a los servicios sociales básicos, lo que implica un incremento de la incertidumbre y desprotección de los hogares. Tener en cuenta una perspectiva relacional, permite entender que estos “enclaves de pobreza urbana” no son producto de la acción de una sola fuerza o actor, sino de la interrelación de actores en disputa, y los constantes cambios en la estructura de oportunidades políticas.

Dando cuenta de un proceso de cambios significativos en la provisión de servicios sociales, Cunill Grau afirmó a fines de los noventa: *“La institucionalidad preexistente está caduca. Lo está, no sólo porque los arreglos basados en la provisión monopólica de los servicios sociales por parte del Estado, no han mostrado ser eficientes y porque en las nuevas condiciones su sustentabilidad tiene escasa viabilidad. También está caduca habida cuenta de que el paternalismo estatal tiene como contracara la pasividad y la despolitización social, y, por tanto, el modelo es incapaz de aportar a la constitución de sujetos autónomos”* (Cunill Grau, 1999).

Si bien los estados de bienestar se corresponden históricamente con los mejores estándares de vida de la población, se puede reflexionar acerca de áreas en las que significó una intromisión en los niveles de autonomía, en actividades tales como el turismo o las viviendas planificadas. Una revisión crítica debiera lograr una combinación entre la aspiración a la mejora en la calidad de vida y la singularidad y las decisiones de las personas.

Las experiencias exitosas que han logrado esta combinación han generado niveles de aceptabilidad que han perdurado en el tiempo: la política de crédito para la vivienda en los primeros gobiernos peronistas logró la conjunción del acceso masivo y la elección individual.

El aumento de la accesibilidad a bienes colectivos no sólo contribuye a una distribución más equitativa de los mismos a nivel micro, sino que también va conformando terrenos de interacción, encuentro y negociación entre vecinos.

En este marco, las organizaciones territoriales construyen, habitan, fundan, se convierten en espacios significativos, “ámbitos relevantes de la vida cotidiana de los actores sociales en los sectores populares, espacios complejos pero importantes en lo que hace tanto a la generación de relaciones sociales como a la constitución de nuevas identidades y sentidos de pertenencias” (Ameigeiras, 1996).

Las organizaciones territoriales en estos últimos años han cobrado mayor presencia en las disputas sociales, convirtiéndose en espacios de rearticulación de la experiencia política de importantes sectores. Estos ámbitos públicos constituyen a nuestro entender, espacios de construcciones políticas discursivas y eventualmente se establecen como lugares productores de políticas públicas que pueden fortalecer procesos de ciudadanía. De esta manera, los puntos de encuentro entre las organizaciones, las políticas sociales y los servicios sociales configuran una trama de relaciones expresando, antes que los modos de inclusión de dichas organizaciones en los mecanismos de gestión

de los recursos sociales, la emergencia de nuevas formas de identificación de las necesidades y de configuración de las demandas.

Referencias

- Acuña, C. H. (1995). *La Nueva Matriz Política Argentina*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Ameigeiras, A. (1996). El conurbano bonaerense: ocupación del espacio, trama sociocultural y pobreza". In *Argentina, tiempo de cambios: Sociedad, Estado y Doctrina Social de la Iglesia* (pp. 389–424). Buenos Aires.: San Pablo.
- Arias, A., & Sadier, E. (2003). *Territorios, Políticas sociales y experiencias de organización*. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos.
- Basualdo, E. (1987). *Deuda externa y poder económico en Argentina*. Buenos Aires.: Editorial Nueva América.
- Bayón, M. C. (2006). Precariedad social en México y Argentina: tendencias, expresiones y trayectorias nacionales. *Revista de La CEPAL*, (88), 133–152. Retrieved from <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/24347/G2289eBayon.pdf>
- Beccaria, L. (1993a). Estancamiento y distribución del ingreso. In A. Minujin (Ed.), *Desigualdad y exclusión: desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo* (pp. 115–148). Buenos Aires: Editorial Lozada.
- Beccaria, L. (1993b). *Reestructuración, empleos y salarios en la Argentina en El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación*. UNICEF.
- Britos, N. (2006). *Ámbito profesional y mundo del trabajo. Políticas sociales y trabajo social en los noventa*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Calcagno, E., & Alfredo Eric, C. (2011). *El resurgimiento argentino*. Buenos Aires: Universidad de Lomas de Zamora.
- Carballeda, A. (2006). *El trabajo social desde una mirada histórica centrada en la intervención*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- CEPAL. (2012). *Panorama Social de América Latina 2011*. Santiago de Chile: United Nations. Retrieved from <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/45171/PSE2011-Panorama-Social-de-America-Latina.pdf>
- Clichevsky, N. (2006). Previendo la informalidad urbana en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Retrieved from <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/26133/LCL2472-P.pdf>
- Cunill Grau, N. (1999). La reinención de los servicios sociales en América Latina. Algunas lecciones de la experiencia. *Revista Del CLAD Reforma Y Democracia*, (13), 1–29. Retrieved from <http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad->

reforma-democracia/articulos/013-febrero-1999/la-reinvencion-de-los-servicios-sociales-en-america-latina.-algunas-lecciones-de-la-experiencia-1

- Danani, C. (1996). Algunas Precisiones sobre la política social como campo de estudio y la noción de población-objeto. In S. Hintze (Ed.), *Políticas Sociales. Contribución al debate teórico-metodológico*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- De Sousa Santos, B. (1998). ¿Por qué es tan difícil construir una teoría crítica? *Zona Abierta*, (82/83), 119–229.
- Diloretto, M. G. (2009). Algunas consideraciones sobre la actual estructura social argentina. Pobreza y precarización de condiciones de vida en la nueva configuración social. *Revista Cátedra Paralela*, (6), 109–120. Retrieved from http://www.catedraparalela.com.ar/images/rev_articulos/arti00073f001t1.pdf
- Esping-Andersen, G. (2000). *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Ewald, F. (1995). El advenimiento de un individualismo negativo. *Debats*, (54), 34–38.
- Gravano, A. (2003). *Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Kessler, G. (2011). Exclusión social y desigualdad social ¿nociones útiles para pensar la estructura social argentina? *Revista Laboratorio*, 12(24), 4–18. Retrieved from http://www.laboratorio.sociales.uba.ar/textos/Lavbo24_1.pdf
- Merklen, D. (2003). Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90. In M. Svampa (Ed.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales* (pp. 81–120). Buenos Aires: Biblos/Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática*. Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Neffa, J. C. (1996). Reflexiones acerca del estado del arte en Economía del Trabajo y Empleo en Panamá. In M. Panaiá (Ed.), *Trabajo y empleo. Un abordaje interdisciplinario* (EUDEBA SEM).
- Oszlak, O. (1991). *Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano*. Buenos Aires: CEDES/Hvmanitas.
- Paugam, S. (1991). Les statuts de la pauvreté assistée. *Revue Française de Sociologie*, 32(1), 75–101.
- Paugam, S. (2007). *Las formas elementales de la pobreza*. Madrid: Alianza Editorial.
- Pérez, P. E. (2011). Jóvenes, estratificación social y oportunidades laborales. *Revista Laboratorio*, 12(24), 134–153. Retrieved from http://www.laboratorio.sociales.uba.ar/textos/Lavbo24_8.pdf

Portes, A., & Hoffman, K. (2003). Las estructuras de clase en América Latina: composición y cambios durante la época neoliberal. Santiago de Chile. Retrieved from <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/12451/P12451.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl>

Raffestin, C. (1980). *Pour une géographie du pouvoir*. Paris: Librairies techniques.

Segura, R. (2006). Segregación residencial, fronteras urbanas y movilidad territorial. Un acercamiento etnográfico. *Cuadernos Del IDES*. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social. Retrieved from http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/cuadernos9_Segura.pdf

Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

Vilas, C. M. (2011). *Después del neoliberalismo: Estado y procesos políticos en América Latina*. Lanús: Universidad Nacional de Lanús.

Wacquant, L. (2001). *Parias urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.